



**JUZGADO TERCERO DE DESCONGESTION CIVIL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE MOCOA**

San Miguel de Agreda de Mocoa, Putumayo, Treinta (30) de Mayo de dos mil Dieciocho (2018).

ST-0021/18

I. OBJETO E IDENTIFICACION DEL PROCESO, RADICACION Y PARTES QUE INTERVIEN

Tipo De Proceso	PROCESO DE RESTITUCION Y/O FORMALIZACION DE TIERRAS
Radicación	860013121001-2015-00372-00
Solicitante	Carlos Aníbal Quelal Guancha CC No. 18.152.050 y otros
Ubicación del Predio	Predio denominado El Vergel, ubicado en la inspección de Policía el Placer, Vereda el Placer, Municipio Valle de Guamuéz Putumayo.
Tipo del Predio	Rural
Asunto	Sentencia No. 0021

II. ANTECEDENTES

Habiéndose agotado las etapas propias del proceso de Solicitud Judicial de Restitución de Tierras, adelantado por la parte solicitante, a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, pasa a proferirse sentencia dentro del presente asunto.

1. HECHOS RELEVANTES

1.1. Respecto de la individualización y caracterización del predio objeto de la solicitud de Restitución: de conformidad con la información que yace en la solicitud, se individualiza el predio objeto de restitución de la siguiente manera:

TIPO/NOMBRE DEL PREDIO	FOLIO DE MAT. INMOBILIARIA	CEDULA CATASTRAL	AREA PREDIO	NOMBRE DEL TITULAR EN CATASTRO	RELACION JURIDICA CON EL PREDIO	
Rural	442-4216	86-865-00-02-0001-0059-000	6 Has. 5946 M2	Ligia Mariela Burbano Pantoja y otros	POSEEDOR	
DIRECCION Y/O UBICACIÓN DEL PREDIO: RURAL, VEREDA EL PLACER, INSPECCION DE POLICIA EL PLACER, MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PREDIO DENOMINADO EL VERGEL.						
NUCLEO FAMILIAR	NOMBRE		IDENTIFICACION		PARENTESCO	PRESENTE AL MOMENTO DE LA VICTIMIZACION
	MARIA CELINA YAQUENO LOPEZ		39.840.443		CONYUGE (Q.E.P.D.)	SI
	CARLOS ANIBAL QUELAL YAQUENO		18.156.878		HIJO	SI
	BAYARDO MIGUEL QUELAL YAQUENO		18.156.202		HIJO	SI
COORDENADAS DEL PREDIO						
PUNTO	LATITUD	LONGITUD	NORTE	ESTE		
2000	0°28'43,106"N	76°58'44,347"W	544761,270797	676881,160674		
2001	0°28'41,928"N	76°58'37,233"W	544724,956036	677101, 407618		
2002	0°28'34,224"N	76°58'36,782"W	544488,02062	677115,265569		
2003	0°28'33,885"N	76°58,45,975"W	544477,69943	676830,656684		

LINDEROS Y COLINDANCIAS	
NORTE	Partiendo desde el punto 2000 en línea recta en dirección oriente, en una distancia de 223,22 mts hasta llegar al punto 2001 con predios de Quebrada Fátima.
ORIENTE	Partiendo desde el punto 2001, en dirección sur, en una distancia de 237,34 mts, hasta llegar al punto 2002, con predios del señor Rubén Pinchao.
SUR	Partiendo desde el punto 2002 en línea recta en dirección occidente, en una distancia de 284,84 mts, hasta llegar al punto 2003 con predios del señor Pinchao.
OCCIDENTE	Partiendo desde el punto 2003 en línea recta en dirección Norte, en una distancia de 288,10 mts, y cerrando con el punto 2000 con predios de Segundo Cuayas.

- 1.2. Respetto de la adquisición del predio objeto de la solicitud:** Manifiesta en su declaración el señor Quelal Guancha, que el predio objeto de solicitud lo adquirió a través de compra en el año 2005, al señor Orlando Melo, acordó un valor de treinta millones (30.000.000), de los cuales pago veinte millones (20.000.000) en dos cuotas, posteriormente el vendedor le rebajo ocho millones (8.000.000), quedando pendiente el saldo de dos millones (2.000.000), los cuales no han sido cancelados porque el señor Melo nunca realizo las escrituras, a pesar de haberse firmado un contrato de compraventa con fecha 05 de julio de 2005, por un valor simulado de dieciocho millones (18.000.000), en el entendido de no pagar muy alto los respectivos impuestos.

Es importante aclarar que el predio denominado el vergel inicialmente era de propiedad del señor Desiderio Quelal Yandun, padre del solicitante quien le vendió al señor Manuel regalado y fue este último quien le vendió al señor Orlando Melo.

Manifiesta además que a partir del año 2007 fecha en que ocurrió su último desplazamiento no ha retornado.

- 1.3. Respetto de los hechos motivos del desplazamiento forzado:** De lo narrado por el solicitante, se deduce como hecho de arraigo y consecuenciales en el municipio expulsor, varios desplazamientos, el primero de ellos en el año 2000, con la llegada de los paramilitares le toco salir con toda su familia hacia la vereda Villa Flor, cerca del municipio de Puerto Caicedo, lugar en donde permanecieron por dos años, luego de este tiempo regresaron al Placer arrendaron una casa, pero en el año 2003 salieron nuevamente desplazados, esta vez fue un deslazamiento masivo, ya que los combates entre la guerrilla y los paracos era cada vez más fuerte, esta vez se desplazaron hasta la Hormiga en ese lugar los alojaron en un colegio y se quedaron por el termino de seis meses, corridos seis meses deciden regresar al Placer ya que el solicitante no podía conseguir trabajo, regresando a su lugar de origen en el año 2004 tiempo en el que aún había violencia pero tenían que aguantar y tener cuidado pues no tenían par adonde ir.

El solicitante se encuentra inscrito en el RUV, desde el 08 de febrero de 2003 y presenta solicitud de inscripción en el RTADF el 08 de marzo de 2014.

III. PRETENSIONES:

A través de la solicitud que hiciera el señor Carlos Aníbal Quelal Guancha ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras despojadas a través de apoderado judicial, busca obtener como pretensiones principales las siguientes:

1. El reconocimiento de su derecho fundamental a la Restitución de Tierras en los términos establecidos por la Corte Constitucional en Sentencia T-821 de 2007 y auto de

2. seguimiento 008 de 2007, en concordancia con el parágrafo 4 del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.
3. La formalización y Restitución Jurídica y/o material del predio urbano descrito en el anterior acápite, la consecuente orden de inscripción del fallo en su favor, la tradición y de medidas cautelares registradas con posterioridad al despojo o abandono así como la cancelación de los correspondientes asientos e inscripciones registrales en el evento que resulten contrarias al derecho de Restitución de conformidad con lo establecido en el literal d) del Artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, así como las demás acciones contempladas en los literales n), e) f) e i) del mismo Artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.
4. La consecuente actualización del folio de matrícula y cédula catastral por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Puerto Asís y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)/ Catastro de Mocoa, en cuanto a su área, linderos y titular del derecho, georreferenciación, coordenadas y forma.
5. La suspensión de todos los procesos declarativos, sucesorios, ejecutivos, divisorios, de deslinde y amojonamiento, abreviados que se hubiesen iniciado ante la justicia ordinaria con relación al predio cuya restitución se solicita así como los procesos notariales y administrativos que afecten el predio, salvo el proceso de expropiación de conformidad con lo normado en el literal c) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011.
6. La protección y acompañamiento al predio objeto de restitución por parte de las autoridades a cargo, en caso de ser necesario su intervención.

Todo ello en el marco de la correspondiente gratuidad y prevalencia de derechos en favor de quien solicita la protección y restitución de sus derechos civiles además de las pretensiones complementarias y subsidiarias relacionadas en el acápite correspondiente de la demanda establecidas en los artículos 72, 121, 84, 86, inciso 4 del artículo 88 literales k y p del artículo 91.

IV. ACTUACION PROCESAL:

Una vez verificadas las correspondientes actuaciones administrativas, en especial aquella de que trata el inciso 5 del art. 76 de la Ley 1448 de 2011, y de que se cumplieran los demás requisitos de procedibilidad se derivó como a continuación se resume:

Fue necesario un requerimiento previo¹ admisión con fecha del 16 de julio de 2015, acto seguido se admitió la solicitud presentada el 08 de julio de 2015, mediante providencia de fecha 04 de agosto de 2015², dándose cumplimiento a las órdenes de notificación allí impartidas el 12 de agosto del mismo año³, la cual quedo debidamente publicitado con edicto emplazatorio el 27 de septiembre de 2015, continua un auto de requerimientos⁴, con fecha de 18 de agosto de 2015, cumplido el 26 de agosto de 2015⁵.

Teniendo en cuenta lo ordenado en Auto lo ordenado en el auto admisorio de la solicitud, en relación al emplazamiento, se reiteró comisión visible a folio 178, concediendo el término de cinco (05) días hábiles para que la UAEGRTD allegue la referida publicación.

Corre traslado al área catastral de la Unidad de Restitución de Tierras del informe presentado por el IGAC⁶.

¹ Folio 113

² Folios 118 al 119 del expediente.

³ Folio 124 del expediente.

⁴ Folio 122 a 123

⁵ Folio 128

⁶ Folio 191.

Habiéndose surtido el emplazamiento en los diarios de amplia circulación sin que uno de los vinculados hay comparecido al proceso y desconociéndose su domicilio, se le nombra representante judicial⁷, debido a las discrepancias en las respuestas allegadas por la URT y el IGAC, se requiere informe conjunto⁸, que por solicitud de las entidades debió prorrogarse en varias oportunidades⁹, teniendo en cuenta la dilación en la etapa de traslado debido a la imposibilidad de localizar al señor Libardo Orlando Melo Pantoja, como tercero vinculado y a fin de dar celeridad al trámite se ordena declaración de parte¹⁰, debido a la imposibilidad para llevarse a cabo la primer audiencia¹¹ se fija una nueva para el 12 de abril de 2016¹².

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi allega memorial en el que informa al juzgado de origen de las novedades encontradas en la visita en conjunto con la URT, razón por la cual solicita se alleguen copia de las escrituras públicas No. 902¹³ de fecha 16/11/1988, Notaria Única de Puerto Asís, No. 901¹⁴ de fecha 16/11/1988, Notaria Única de Puerto Asís, No. 088¹⁵ de fecha 26/01/1993, Notaria Única de Puerto Asís y No. 741¹⁶ de fecha 27/08/2001, Notaria Única de Valle de Guamuéz; con auto de sustanciación de fecha 16 de marzo de 2016¹⁷ se ordena requerir a dichas Notarias con el fin de que allegue la información citada.

Antes de concluir la etapa de traslado, se dan trámites como dar trámite a la solicitud de pruebas presentadas por el representante legal del ministerio público, citando a dos personas a declarar y delegando en la URT la ubicación y traslado de los mismos para llevar a cabo dicha diligencia, dándose a conocer la imposibilidad¹⁸ de ubicar a los mismos, se ordena el emplazamiento de Libardo Orlando Melo con el fin de garantizar la debida notificación, surtido este trámite se procede a designar curador Ad Litem¹⁹, el profesional en derecho asignado se notifica²⁰.

Revisado nuevamente el folio de matrícula inmobiliaria del predio objeto de solicitud No. 442-4216, justamente en la anotación No. 6 en donde el comprador es el señor Segundo Florencio Arteaga y como vendedor el señor Carlos Anibal Quelal Guancha de una (01) hectárea, es que requieren claridad a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Asís, para que informe si abrió un nuevo folio de matrícula inmobiliaria respecto de la venta antes referida, de manera diligente la Superintendencia de Notariado y Registro de Puerto Asís (P), allega el respectivo formulario de corrección Dentro del folio de matrícula inmobiliaria No. 442-4216, en el cual el señor Carlos Anibal Guancha le vende 01 HA. Al señor Segundo Florencio Arteaga, a quien se le asigna el folio de matrícula inmobiliaria número 442-52489, en el cual efectúan la respectiva segregación que por error involuntario no se hizo en dicha venta.

Finalmente con auto interlocutorio No. 567 de fecha 11 de septiembre de 2017, se abre a pruebas²¹ y se ordena desvincular al señor Libardo Orlando Melo, el cual fue debidamente notificado²², no

⁷ Folio 199

⁸ Folio 200

⁹ Folio 207, 212 y 217

¹⁰ Folio 215

¹¹ Folio 220

¹² Folio 238

¹³ Folios 225 a 231

¹⁴ Folios 225 a 231

¹⁵ Folios 225 a 231

¹⁶ Folio 235 a 237

¹⁷ Folio 223

¹⁸ Folio 244

¹⁹ Folio 260

²⁰ Folio 263

²¹ Folio 269 a 270

²² Folio 271 del expediente.

obstante lo anterior y por no haberse recaudado todas las pruebas se hace necesario conceder prórroga y reiterar al IG AC²³, sin obtener respuesta, en actuación seguida se corre traslado al ministerio público, quien guarda silencio.

V. CONSIDERACIONES:

5.1. Presupuestos Adjetivos:

Este Juzgado es competente de conformidad con lo que viene establecido en los artículos 79 y 80 de la Ley 1448 de 2011, la parte solicitante se encuentra legitimada y debidamente representada²⁴ así como se encuentra presentada la demanda en legal forma de conformidad con lo que viene normado por el los artículo 71 y sub siguientes y el artículo 84 de la Ley 1448 de 2011.

También se encuentra acreditado dentro del proceso que se cumple el principio de procedibilidad de que trata el artículo 76 de la Ley 1448, toda vez que el señor Carlos Anibal Quelal Guancha, se encuentra incluido en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, mediante Resolución RP 0131 de 11 de julio de 2014 en calidad de víctima de abandono forzado, junto con su grupo familiar al momento del despojo, esto tal como se evidencia a folio 110 del expediente a través de constancia NP 0024 del 02 de julio 2015.

5.2. Problema Jurídico:

Tiene derecho el solicitante, señor Carlos Aníbal Quelal Guancha, junto con su núcleo familiar a ser reparados de manera integral, a obtener la tutela de su derecho fundamental a la restitución de tierras y a serle restituido y formalizado el predio sin denominación ubicado en el sector rural, ubicado en la inspección de Policía El Placer, Vereda el Placer, en el municipio de Valle de Guamuéz objeto de solicitud del cual es poseedor?

Para responder y dar solución a la anterior formulación, se tendrán en cuenta las condiciones relacionadas con los hechos de violencia que afectaron la zona donde se encuentra ubicado el predio, la calidad de víctima de la solicitante y su familia, su situación habitabilidad en el bien y las razones que dieron lugar al abandono del predio de la solicitante que se encuentren acreditadas dentro el trámite administrativo y judicial.

5.3 Marco jurídico y conceptual:

La Restitución de Tierras despojadas o abandonadas en Colombia, viene como Instrumento resultante de un proceso evolutivo de los fenómenos sociales que de manera generalizada afectan sectores más vulnerables, fundamentado en normas constitucionales e internacionales y nutrida con las tendencias normativas y herramientas de protección, que han venido aterrizándose sobre la temática referente a la reparación y protección de las víctimas del conflicto armado, a través de un proceso histórico de adaptación e implementación de las herramientas legales, administrativas y judiciales puestas a disposición de la población afectada, víctima del conflicto armado en Colombia, observando estrictamente criterios de justicia y equidad bajo la óptica del enfoque diferencial a fin de proteger real y efectivamente a los sectores más vulnerables.

Múltiples y reiterados han sido los pronunciamientos de nuestro máximo órgano constitucional, que han decantado las teorías referentes a individualización, conceptualización, fundamentación legitimación y resolución de los conflictos que afectan directamente a las víctimas del conflicto armado colombiano, el despacho acoge los criterios que claramente decanta la sentencia reciente T-

²³ Folios 278 y 280

²⁴ Folios 111

315 de 2016 que recorre no sólo los aspectos adjetivos y de implementación más destacados si no que ahonda en resaltar su esencia, finalidad y la importancia del rol del juez de Restitución en la Búsqueda de una paz estable y duradera:

(...) 4.1. *El diseño del proceso de restitución de tierras contemplado por la Ley 1448 de 2011 constituye en gran medida un reconocimiento a las formas propias que, en el contexto de la violencia rural, adoptó el abandono forzado de aquellas,²⁵ así como la multiplicidad de dinámicas de usurpación y de despojo tanto material como jurídico que han tenido lugar en la compleja realidad histórica del conflicto armado interno colombiano. En relación con ello, vale la pena reproducir un conjunto de reflexiones vertidas en el Informe de Ponencia para Primer Debate del Proyecto que posteriormente se convirtió en la denominada Ley de Víctimas:*

“[...] Cerca de 750.000 hogares campesinos fueron desplazados de sus territorios por la fuerza en las últimas dos décadas, de los cuales 460.000 abandonaron un poco más de tres millones de hectáreas. De las tierras abandonadas, una parte permanece así, otra está cuidada por parientes o vecinos, o ha sido repoblada con campesinos a quienes los jefes armados adjudicaron tierras despojadas y otra parte fue transferida de hecho o de derecho a terceros, generalmente personas sin conexión aparente con los victimarios.

El despojo asumió varias modalidades, desde las compras forzadas a menor valor hasta el destierro, la usurpación física de la posesión y la destrucción de las viviendas y cercas que delimitaban los predios. El despojo de tierras fue legalizado, muchas veces, con transferencias forzadas, con la participación de notarios y registradores, y el rastro de los despojadores fue borrado por testaferros y múltiples traspasos a terceros de aparente buena fe.

Otras veces el despojo afectó derechos de tenencia y posesión, interrumpiendo el término de prescripción, y terceros obtuvieron títulos de adjudicación o titularon por vía judicial a su favor. En ocasiones el INCORA o el INCODER declararon caducados los títulos de beneficiarios de reforma agraria cuando se desplazaron y readjudicaron las parcelas a otras personas. Otras veces el IGAC englobó los predios despojados en otro mayor, alterando el catastro para desaparecer la cédula catastral de los despojados.

(...) 4.2. *En efecto, aquellas situaciones llevaron a repensar las estructuras procesales típicamente civiles, en procura de crear medidas excepcionales para ofrecer respuestas reales a las víctimas del conflicto en el marco de un proceso transicional de tierras, en el cual la restitución actuase como un componente preferencial y esencial del derecho a la reparación integral.*

4.2.1. *Precisamente por las especificidades de la tipología del despojo, el abandono y la usurpación, una adecuada comprensión de la restitución y, en particular de la restitución de tierras exigió del legislador la construcción de un conjunto de medidas administrativas y judiciales de carácter extraordinario que hoy constituyen la denominada acción de restitución, cuyo propósito es el “restablecimiento de la situación anterior a las violaciones [sufridas como consecuencia del conflicto armado interno]” y subsidiariamente, cuando ello no fuere posible, la compensación.*

4.3. *En efecto, el proceso de restitución de tierras, tal y como está contemplado por la Ley 1448 de 2011, se compone de una etapa inicial o administrativa, a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y otra fase secundaria o judicial, en cabeza de los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras.*

(...) 4.3.3. *Aunque el proceso de restitución es de única instancia y ello se ha considerado como constitucionalmente válido,²⁶ a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de procesos judiciales, donde la litis concluye con la ejecutoria de la última decisión adoptada, en el proceso citado, el legislador previó una competencia ius fundamental extendida. En otras palabras, “el Juez o Magistrado [mantiene la] competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, prosiguiéndose dentro del*

²⁵ En la sentencia C-715 de 2012, la Corte, entre otros asuntos debió definir si el Legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al prever un conjunto de medidas para el despojo y no para el abandono forzado de predios, según la lectura que los demandantes hacían del artículo 74 de la Ley de víctimas y restitución de tierras, y de otras normas que giraban en torno al concepto de ‘despojo de tierras’. La Corte consideró que, con independencia de las relevantes discusiones teóricas y sociales acerca de las tipologías de estos fenómenos, las medidas legislativas dictadas en respuesta al despojo son también aplicables al abandono de tierras: “Para la Corte, si bien los conceptos de abandono y despojo son fenómenos 1 de las víctimas del conflicto interno, razón por la cual esta Corporación en múltiples y reiteradas ocasiones ha reconocido normativa y jurisprudencialmente a las víctimas de despojo y abandono sin ninguna distinción, como sucede con la definición del delito de desplazamiento forzado. En este orden, la Ley 1448 de 2011 y especialmente los artículos que ahora se demandan –arts. 28 y 72– dejan ver el carácter asimilable de las víctimas de despojo, de usurpación y de abandono forzado de tierras, de tal manera que ambas son incluidas y tenidas en cuenta por el Legislador en el marco de la Ley 1448 de 2011”.

²⁶ En sentencia C-099 de 2013, se consideró razonable esta previsión normativa al ponderar la limitación que entraña la ausencia de una instancia de revisión, con la finalidad constitucionalmente válida perseguida por la norma. Adicionalmente, explicó que el derecho de contradicción, en particular, y el debido proceso en general se encuentran garantizados por la estructura misma del procedimiento de restitución.

mismo expediente las medidas de ejecución de la sentencia". En ese sentido, el proceso sólo acaba cuando efectivamente se hubiesen cumplido todas las órdenes de protección y restitución contenidas en el fallo.

4.3.4. Con todo y lo anterior, la competencia del juez de restitución puede ir más allá. En efecto, el artículo 102 de la Ley 1448 de 2011, permite al funcionario judicial conservar su competencia después de la sentencia "(...) para dictar todas aquellas medidas que, según fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposición de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias." Lo anterior implica que aun cuando en la sentencia no se haya dado una orden precisa, el juez pueda emitir nuevas y posteriores órdenes con el propósito de proteger los derechos fundamentales de los reclamantes, particularmente, los vinculados a la restitución, posibilidad que está en consonancia con los principios de estabilización y seguridad jurídica contemplados por el artículo 73 de la misma Ley.

4.3.5. En síntesis, dichas facultades ulteriores al fallo de restitución no son sólo entonces poderes judiciales de ejecución; también consisten en la posibilidad que tiene el juez de crear nuevos remedios jurídicos para asegurar que el proceso de restitución de tierras cumpla sus propósitos constitucionales y en el marco de la "(...) justicia transicional [sea] un [verdadero] elemento impulsor de la paz", tal como lo ha sostenido esta Corporación. Concedido esto, se trata entonces de dos competencias ius fundamentales extendidas distintas del juez de restitución de tierras, de un lado, se tiene la **competencia para ejecutar** las órdenes dadas en la sentencia y, de otro, la **competencia para emitir nuevas órdenes** en procura de garantizar la estabilización y seguridad jurídica de la restitución.

(...) 4.4.1. En efecto, los altos valores jurídicos que se defienden en el proceso de restitución, se proyectan directamente sobre la labor de los jueces de tierras y sus amplísimas facultades dentro del mismo como un trámite integral, que no sólo pretende definir la relación jurídica existente entre el reclamante y su predio sino que además, está tras la búsqueda proporcional de alivios materiales a las violaciones de derechos fundamentales particularmente intensas que ocurren como consecuencia del desarraigo y la indignidad ocurrida por efecto del desplazamiento forzado. Por tal motivo, no resulta extraño que el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 fije el derecho a la reparación integral de manera diferenciada, transformadora y efectiva; y bajo dimensiones individuales, colectivas, materiales, morales y simbólicas.

4.4.1.1. Justamente, en relación con dichas dimensiones, cabe indicar que en el proceso de restitución, además del restablecimiento de las condiciones jurídicas y materiales del reclamante, resultan comprometidos una amplia gama de intereses que, si bien no tienen un origen estricto en la comprensión individual de la situación del peticionario, sí se constituyen en circunstancias y agentes externos que tienen la potencia suficiente de impedir el retorno efectivo de la población desplazada y, en ese sentido, de reproducir la conflictividad social.

4.4.2. Es por tal motivo, que los jueces de restitución no son en estricto sentido sólo jueces de tierras. En el marco de una visión teleológica e integral del proceso, tienen la responsabilidad de ajustar sus actuaciones al "(...) objetivo primordial de conseguir la reconciliación y la paz duradera y estable" que, con independencia del esclarecimiento de la titularidad jurídica del predio restituido, debe involucrar también aquellas intervenciones que siendo visibles en el proceso pueden comprometer otras vulneraciones distintas de derechos fundamentales a las alegadas por las víctimas solicitantes y que, de no gestionarse adecuadamente, imposibilitarían el cumplimiento de los propósitos transicionales de restitución.

Es así como se trabaja día a día en nuestro país en esa búsqueda de verdad, justicia y reparación con la utilización de cada vez novedosos y mejores instrumentos judiciales para poder resarcir de manera más justa, eficaz y completa las afectaciones derivadas de un contexto de violencia que ha golpeado las bases más sensibles y vulnerables de nuestra sociedad, el campesinado, la infancia, mujeres y madres trabajadoras, cabezas de hogar, etc., golpes que si bien han dejado huella de dolor destierro, discriminación y olvido y que esta misma no se borra, por cuanto además debe ser recordada como símbolo de perdón y fortalecimiento tampoco debe ser estigma que impida la resocialización la convivencia, la reintegración a las labores de los campesinos en sus tierras, la paz.

Enfoque diferencial aplicado a la política de restitución de tierras

La situación de crímenes atroces, de lesa humanidad y de desplazamiento forzado o abandono de tierras que se ha evidenciado a lo largo de la historia de Colombia, presenta un común denominador que no es otro diferente a aquel que se circunscribe a la existencia de un factor discriminatorio, asociado al género, la edad, o la pertenencia a un grupo minoritario²⁷, por tal razón, debe ser un aspecto de relevante consideración en la etapa administrativa y posteriormente en la judicial de los procesos de Restitución de Tierras despojadas o Abandonadas Forzosamente, pues merecen un

²⁷ Afrodescendientes, comunidades indígenas, población Rom o Gitanos

especial tratamiento que se ha decantado como lo han hecho los entes constitucionales y los instrumentos internacionales de protección en el marco legal estableciendo en el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, lo cual se traduce en la obligación legal no solamente en la atención a la víctima, sino que además, en lo que concierne a la intervención oficial para asegurar que éste grupo de personas medien de manera directa en la sustanciación de los casos, en el litigio de los mismos, en las decisiones judiciales y en la etapa posterior a ellas.

Es así como en desarrollo de ésta política de justicia transicional se expidió el Decreto 4829 de 2011 para incluir los componentes viabilizadores de la real ejecución del principio de discriminación positiva dentro del marco de la actuación administrativa del proceso de restitución de tierras, mismo que debe ser observado en la fase judicial como en las posteriores actuaciones de garantía del goce estable de los derechos reconocidos en la conclusión del trámite integral (Fase administrativa y judicial), en todo caso, procurados desde una óptica adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva.

El hecho de procurar la mejor atención a las víctimas que se enmarquen dentro una situación especial y diferenciada del resto social, busca materializar la mayor atención a la población desplazada que actualmente se sujeta a un estado de mayor vulnerabilidad, para efectos de dignificarlas en el reconocimiento de sus derechos, superando de esa manera, el estado de cosas inconstitucional advertido en la sentencia T 025 de 2004.

5.3. Lo Probado:

De conformidad con el acervo probatorio que obra en el expediente, encontramos, los siguientes hechos probados:

Hechos de violencia: De acuerdo con el estudio de Contextualización General del municipio del Valle del Guamuez que nos aporta la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en su solicitud de restitución, las conclusiones tomadas del punto séptimo de la misma, son el resultado de un análisis fáctico, temporal y espacial en los que encajan perfectamente los hechos descritos en el acápite correspondiente. Resultan claros y notorios estos hechos que referencia quien representa al solicitante, toda vez que reseña hechos históricos verídicos en nuestro país fundamentado en fuentes de información disponibles en entidades, páginas web y testimonios.²⁸

Básicamente se explica el hecho de surgimiento de grupos armados al margen de la Ley con la ausencia de la presencia estatal en las zonas afectadas, lo que hizo que proliferara explotación agrícola de la planta de coca por parte de la guerrilla (FARC), situación que transforma las dinámicas culturales, sociales, políticas y económicas de las personas.

Con las nuevas políticas imperantes para obtener dinero fácil, surgen las denominadas pirámides cuya quiebra comenzó a generar pérdidas para los pobladores, luego con las olas de invasión paramilitar con la que se había tenido cierto pacto de no agresión y las fumigaciones a cultivos, que afectaron también a aquellos cultivos lícitos, se elevaron las condiciones para que se generaran más desplazamientos y hechos victimizantes en la zona.

Posteriormente, con la desmovilización de los grupos de autodefensa en el año 2006, se transforman los actores armados en las llamadas Bacrim o neoparamilitares y se repositionan las Farc en el territorio mediante grupos conocidos como los Rastrojos y los Urabeños quienes protagonizaron los hechos violentos entre los años 2010 y 2014 consistentes en ataques a la Fuerza Pública y a la infraestructura Petrolera del Valle del Guamuez, proliferaron además, grupos de delincuencia común etc.

²⁸ Folios 16 a 24

A partir de 2015 interviene el Estado para dar un viraje a esta situación de conflicto que por años ha azotado a estas veredas, a partir de estrategias como el plan Retorno lideradas, entre otras, por el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a víctimas SNARIV.

Dado que estos hechos, como quedó anotado concuerdan en espacios de tiempo lugar y condiciones resulta probada en consecuencia, la veracidad de los hechos violentos que narra el señor Carlos Aníbal Quelal Guancha en su solicitud, así como también los hechos del desplazamiento forzado del predio del cual es poseedor irregular desde el año 2005.

Condición de Víctima del señor Carlos Aníbal Quelal Guancha: Desarrollando el concepto de víctima que establece la Ley 1448 de 2011 en su artículo tercero y los criterios jurisprudenciales a tener en cuenta a fin de entrar a determinar quién puede ser considerado víctima del conflicto armado colombiano, encontramos que en sentencia T-054 de 2017 se reiteran las posiciones esbozadas por el máximo órgano constitucional al respecto:

5. La noción de víctima de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado colombiano. Reiteración de jurisprudencia:

En el ordenamiento interno colombiano, existe un importante marco normativo que ha sido reiteradamente reconocido por esta Corporación.²⁹ Desde el año 1993, con el artículo 1º del Decreto 444, se reconoció la calidad de víctima a aquellas personas que hubieran sufrido perjuicios indirectos como consecuencia de atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos que afecten a la población civil. Posteriormente, se amplió el concepto incluyendo a la población afectada como consecuencia de tomas guerrilleras³⁰, a las que sufrieran por combates y masacres indiscriminadas por motivos ideológicos o políticos³¹ y, con el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, se incluyó a la población civil que sufriera perjuicios en su vida, integridad personal o bienes, como consecuencia de actos relacionados con el marco del conflicto armado interno, atentados terroristas, combates, ataques y masacres.

Con la Ley 975 de 2005, se dio un importante paso con la creación de un marco legal para reincorporar a la vida civil a los miembros de grupos armados al margen de la ley y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, justicia y reparación integral. En el artículo 23 de dicha ley se estableció el incidente de reparación integral para que, en el curso de un proceso penal, cuando se determinara la responsabilidad del acusado, y la víctima o el Ministerio Público lo solicitasen, se procediera a reparar integralmente a la víctima, por los daños causados con ocasión de la conducta criminal.

Tres años después, el Decreto 1290 de 2008, dispuso la creación de un programa de reparación individual por vía administrativa de las víctimas de los grupos armados al margen de la ley, basándose en el denominado principio de solidaridad. La reparación por vía administrativa se entendió como una reparación anticipada del Estado por hechos punibles realizados por grupos al margen de la ley, “sin perjuicio de la responsabilidad de los victimarios y de la responsabilidad subsidiaria o residual del Estado”. Se definió como víctimas, aquellas personas a las que se refiere el artículo 15 de la Ley 418 de 1997.

En tratándose de las normas internas que han sido expedidas por el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, de manera prevalente debe mencionarse la Ley 1448 de 2011 y sus decretos con fuerza de ley creados para satisfacer los derechos de los grupos étnicos. La Ley 1448, comúnmente reconocida como “Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”, busca restablecer el proyecto de vida de cada víctima del conflicto armado interno, así como garantizar el goce efectivo de sus derechos de manera sostenible y transformadora.

La Ley 1448 de 2011, se enmarcó dentro del campo de la justicia transicional y tiene como propósito definir acciones concretas para garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

En relación con el concepto de víctima, el artículo 3º de dicha ley estableció lo siguiente:

“aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado

²⁹ Corte Constitucional, Sentencia T-364 de 2015.

³⁰ Artículo 18 de la Ley 104 de 1993.

³¹ Artículo 10 de la ley 241 de 1995.

de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima”.

De conformidad con el citado artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, el propio Estado no solo reconoció la existencia del conflicto armado interno en Colombia, sino también la configuración de violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH); en especial, el artículo 3º común a los Convenios y Protocolos de Ginebra.

Dentro de los aspectos tenidos en cuenta en el artículo 3º común a los Convenios y Protocolos de Ginebra, se encuentra el denominado principio de distinción, el cual genera a las partes el deber de diferenciar entre combatientes y no combatientes. Ninguna de las partes en conflicto puede involucrar a las personas que no tomen o hagan parte directamente de las hostilidades. Estas personas, por ese hecho, adquieren el estatus de personas protegidas. (Negrillas del despacho)

Así las cosas, cualquier afectación a los derechos de las personas protegidas en el marco del conflicto armado interno, es reconocida y está enmarcada en la Ley 1448 de 2011.

A partir de las sentencias C-253A de 2012 y C-781 del mismo año, esta Corporación ha entendido que en cuanto a la expresión consagrada en el artículo 3º referente a la noción de víctima “con ocasión al conflicto armado”, dicho “conflicto armado” debe interpretarse de manera amplia, más allá de las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con exclusión de otros.³² (Negrillas del Despacho)

Esta Corte ha indicado que estos criterios interpretativos son obligatorios para los operadores jurídicos y “ante la ocurrencia de una afectación grave de derechos humanos o de una infracción de las normas del derecho humanitario, en caso de duda sobre si tal hecho ha ocurrido en el marco del conflicto armado interno, debe darse prevalencia a la interpretación en favor de la víctima”.³³

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta además de los criterios arriba citados, el señor Quelal Guancha y su núcleo familiar, ostentan la calidad de víctimas del conflicto armado en Colombia, sector Inspección de Policía el Placer, vereda el Placer del Municipio del Valle del Guamuez, según aparece en el folio 116, constancia No. NP0027 del 27 de julio de 2015.

Identificación y determinación del predio objeto de la Solicitud: Respecto de los datos consignados en el acápite de los hechos de la demanda, se tienen como correctos y ciertos, no obstante, resulta menester aclarar que el predio que se solicita en restitución, pertenece a uno de mayor extensión a nombre del señor Quelal Yandum José Desiderio, quien dona a su hijo Carillos Aníbal Quelal Guancha, sustentado ello en el Certificado de Libertad y Tradición y registrado bajo folio de matrícula inmobiliaria No. 442- 4216, visible a folio 132 a 141 del plenario, es de aclarar que no existe información catastral, de otra parte el único polígono predial que relaciona el predio el Vergel es el polígono o cedula catastral No. 86-865-00-02-0001-0059-000, que aparece con un área de 1 Has + 9000 Mts², lo cual indica una desactualización en el IGAC, por lo que en su momento y si a ello hubiere lugar, se procederá a ordenar el desenglobe de dicha cedula catastral en favor del aquí solicitante.

³² Corte Constitucional, Sentencia T-364 de 2015. “A partir de las sentencias C-253A de 2012 y C-781 del mismo año, esta Corporación ha entendido que la expresión consagrada en el artículo 3º referente a la noción de víctima “con ocasión al conflicto armado”, incorpora una definición operativa que sirve (i) para delimitar el universo de personas beneficiarias de unas prerrogativas especiales establecidas en la Ley 1448 de 2011, (ii) es compatible con el principio de igualdad en la medida en que aquellas personas cuyos hechos victimizantes no estén circunscritos al conflicto armado, siguen siendo acreedores de medidas ordinarias previstas en el resto del ordenamiento jurídico, (iii) la expresión “con ocasión” hace alusión a una “relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado”. (iv) La jurisprudencia constitucional ha entendido que “el conflicto armado” debe interpretarse de manera amplia, así, “lejos de entenderse bajo una óptica restrictiva que la limite a las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con exclusión de otros, ha sido interpretada en un sentido amplio que incluye toda la complejidad y evolución fáctica e histórica del conflicto armado interno colombiano. Estos criterios, fueron tenidos en cuenta por el Legislador al expedir la Ley 1448 de 2011 y constituyen criterios interpretativos obligatorios para los operadores jurídicos encargados de dar aplicación concreta a la Ley 1448 de 2011” y (v) “ante la ocurrencia de una afectación grave de derechos humanos o de una infracción de las normas del derecho humanitario, en caso de duda sobre si tal hecho ha ocurrido en el marco del conflicto armado interno, debe darse prevalencia a la interpretación en favor de la víctima (Corte Constitucional, sentencia C-781 de 2012).”

³³ *Ibidem*.

Lo anterior de conformidad con la aclaración presentada por la U.R.T. previo admisión (folios 114 al 116) y se corrobora con la información consignada en el memorial que arrima el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, visible a folio 187 del expediente, en el cual manifiestan en relación al predio catastral si bien es cierto los datos contenidos en el son descritos en la tradición del folio de matrícula inmobiliaria No. 442-4216; este presenta un ubicación física diferente al levantamiento topográfico realizado por la U.R.T; de igual forma aclaran que al momento de realizar la visita al predio, verificados los linderos no se observó que sobre ellos existiera algún tipo de conflicto, sin embargo una vez revisada la información obtenida en campo con la información espacial (cartográfica), se evidencian traslapes los cuales revisados corresponden a inscripciones catastrales que guardan relación dentro de la tradición de la matrícula del folio 442-4216, razón por la cual no es posible realizar la identificación e individualización del predio objeto de solicitud.

La U.R.T. descubre el traslado del memorial allegado por el IGAC, colocando de presente que luego de revisar detenidamente el informe, no se observa que sobre estos linderos exista ningún tipo de conflicto, aclarando que al momento de realizar trabajo de oficina si se presenta superposición con otros predios de acuerdo a la cartografía digital mas no en terreno, información que también fue puesta en conocimiento en el ITP en donde además aclaran que existe una desactualización en la zona por parte del IGAC, pero el predio objeto de restitución se encuentra contenido dentro de otro de mayor extensión identificado con el código 86 865 00 02 00 0001 0059 000, finalizan advirtiendo que no es posible realizar la individualización de los predios que desprenden del folio de matrícula madre y que tendrían la superposición por que no han sido solicitados en restitución y por lo tanto no existe la facultan ni la competencia para hacerlo.

Es preciso mencionar que el juzgado de origen teniendo en cuenta las respuesta allegadas por las entidades en mención, dispone se lleve a cabo un trabajo de campo con el fin de allegar un informe conjunto que permita la unificación de criterios, como se relató en la crónica procesal, dicho informe conjunto se requirió y reitero en varias oportunidades, concediendo además las prórrogas solicitadas, sin obtener respuesta alguna hasta la remisión a esta judicatura en descongestión, ahora bien teniendo en cuenta que se impartió el procedimiento adecuado sin obtener respuesta conjunta por las entidades, es menester aplicar lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, en relación a la Georreferenciación, proceso que se realizó en este caso y a las coordenadas exactas del predio, de donde provienen tanto catastral como jurídicamente y que es la URT la encargada en la etapa administrativa de determinar con precisión las áreas de terreno, se continuara el tramite otorgando total veracidad a la información allegada en la solicitud.

Relación Jurídica o calidad que ostenta el solicitante respecto al predio: Poseedor De conformidad con lo que viene propuesto en la solicitud de Restitución, se encuentra una confusión inicial en relación a la calidad, puesto que se definía como propietario, razón por la cual fue necesario requerir a la U.R.T. en ese sentido, esta entidad recorrió el traslado con memorial visible a folio 114 a 116, en el cual allegan una nueva constancia numero NP 0027 de julio de 2015, en la cual se corrige un error de dígito y se define una la relación jurídica de POSEEDOR.

Es oportuno aclarar que el predio objeto de solicitud inicialmente era de propiedad del padre del solicitante quien luego vende al señor Manuel Regalado, y por último este fue quien vendió a Orlando Melo.

Otros hechos probados: Dentro del acervo probatorio arrimado también cabe resaltar que la secretaria de salud municipal del Valle de Guamuéz, Putumayo, allega caracterización de la familia del solicitante, en la cual los individualizan y se tiene que su núcleo familiar se compone por el señor Carlos Aníbal Quelal Guancha (padre y sus dos hijos Bayardo Miguel Quelal Yaqueno y Carlos Aníbal Quelala Yaqueno, hijos del solicitante quienes padecen de esquizofrenia y se encuentran vinculados al régimen subsidiado con la EPS Emsanar, al igual que el señor Quelal Yaqueno, en su diagnóstico describen la familia con condiciones muy precarias, la vivienda que habitan ubicada en el barrio el

recreo en la inspección de policía El placer, es arrendada y su construcción es de regulares condiciones, que el solicitante es la cabeza de hogar y trabaja como agricultor, manifiesta que es difícil para el irse a trabajar y dejar sus dos hijos solos pues no se puede cuidar solos por su discapacidad y depende de la colaboración de los vecinos para su alimentación, ya que su esposa y madres de los jóvenes murió ya hace un tiempo.

De igual forma el ICBF allega informe del grupo familiar de solicitado, en el cual ratifican lo ya mencionado, agregando que los adultos en situación de discapacidad se encuentran en una organización de discapacitados y que el solicitante pertenece al programa de adulto mayor.

5.4. Caso Concreto:

Decantado lo anterior pasamos a analizar si de todo lo probado, se concluye finalmente el reconocimiento de los derechos invocados con la solicitud, teniendo en cuenta que la pretensión principal de restitución lleva inmersa la declaratoria de pertenencia del mismo, habida cuenta la calidad de poseedor que ostenta el solicitante respecto del predio objeto de la solicitud de Restitución.

Para efectos de estudiar la viabilidad de declarar la Usucapión o Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, en el caso del señor Carlos Aníbal Quelal Guancha, se procederá a verificar el cumplimiento de requisitos legales para tales efectos consagrados en la Ley Civil Vigente, es decir, los artículos 2532 del Código Civil, artículo y Ley 791 de 2002, artículos 1 y 6.

Para que sea viable su declaratoria es necesario que se cumplan ciertas condiciones, a saber:

1. Posesión material sobre el bien a usucapir: la posesión material del solicitante sobre el predio objeto de la solicitud, quedó probado y no es punto de discusión de conformidad con lo que quedó decantado en acápite anterior.
2. Que la posesión se ejerza durante el lapso de tiempo dispuesto por la ley: Dice en sus descargos y tal como quedó demostrado, el señor Carlos Aníbal Quelal Guancha, ha venido ejerciendo la posesión irregular desde el año 2005 a la fecha, con ánimo de señor y dueño, incluso se relaciona con el predio antes de la compraventa del área solicitada, pues su padre el señor Desiderio Quelal Yandun es propietario del predio de mayor extensión sobre el cual se encuentra contenido el predio solicitado, así pues el señor Carlos Aníbal Quelal Guancha ha ostentado la aprensión material del bien con su intención de ser dueño del mismo, ahora bien teniendo en cuenta que se encuentra probado el desplazamiento forzado y consecuente abandono por varios años, acarrea en efecto concluir que sí se ha presentado una perturbación a la explotación del predio, y que de cara a lo preceptuado en el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, implica que este requisito del tiempo, no es exigible en el presente caso y acudió al ente competente, es decir la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras para efectos de exponer su caso y solicitar la correspondiente restitución de derechos.
3. Que el bien sea susceptible de adquirirse por prescripción: el predio urbano ubicado en el municipio de Valle del Guamuéz (P), Inspección de Policía el Placer, vereda el Placer, identificado con FMI No. 442-4216 y Cédula Catastral No. 86-865 -00-02-0001-0059-000, no se encuentra incurso dentro de ninguna clase de afectación o prohibición que impidan que pueda ser adquirido por declaratoria de pertenencia en razón al cumplimiento de los requisitos para que se dé la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio adquisitiva de dominio.

Frente al tiempo, el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011 preceptúa,

“La perturbación de la posesión o el abandono del bien inmueble, con motivo de la situación de violencia que obliga al desplazamiento forzado del poseedor durante el período establecido en el artículo 75, no interrumpirá el término de prescripción a su favor.

El despojo de la posesión del inmueble o el desplazamiento forzado del poseedor durante el período establecido en el artículo 75 no interrumpirá el término de usucapión exigido por la normativa. En el caso de haberse completado el plazo de posesión exigido por la normativa, en el mismo proceso, se podrá presentar la acción de declaración de pertenencia a favor del restablecido poseedor.”

En ese sentido, hasta este momento se han cumplido con cada uno de los presupuestos requeridos en la ley y en la Jurisprudencia para estar legitimado en la causa por activa el reclamante y salir avante la acción de restitución aquí impetrada, lo cual se declarará en la parte resolutive, además, es suficiente para que prosperen las pretensiones en la demanda de PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, lo que se declarará más adelante, esto con la finalidad no sólo de reparar de manera integral las afectaciones sufridas, sino también de revertir las cosas a su estado anterior, de modo que se concrete, de manera real y efectiva el goce de los derechos fundamentales de los beneficiarios del presente fallo.

Así las cosas, siendo legalmente procedente declarar la propiedad del predio objeto del presente proceso a nombre de la parte solicitante, por acreditar además el cumplimiento de los demás requisitos legales habida su condición de víctima dentro del presente asunto, se accederá a las pretensiones de la demanda en el sentido de ampararlo en su derecho fundamental a la Restitución y Formalización de Tierras así como también el de su núcleo familiar al momento del despojo, esto con la finalidad no sólo de reparar de manera integral las afectaciones sufridas, sino también de revertir las cosas a su estado anterior, de modo que se concrete, de manera real y efectiva el goce de los derechos fundamentales de los beneficiarios del presente fallo.

5.5. Conclusiones:

Para enmarcar mejor la justificación y sentido de las decisiones que a continuación se condensan considera menester el despacho citar y acoger los nuevos y más recientes raseros esbozados por Nuestra Corte Constitucional en la ya mencionada sentencia T-054 de 2017:

Esta Corporación ha consagrado que el derecho a la reparación integral es un derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado, porque: “1) busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no repetición”³⁴.

*(...) El derecho a la reparación integral, a su vez, implica la obligación del Estado de adoptar **“todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación”**³⁵. (Negrillas del despacho)*

(...) La Ley 1448 de 2011 se expidió para ser una ley de reparación integral. Es decir, más allá de que los victimarios hayan sido agentes estatales o miembros de grupos armados al margen de la ley, el Estado asumió el deber de reparar por la vía administrativa; es decir, de manera más expedita y eliminando la carga de la prueba en cabeza de las víctimas.

*De trascendental importancia para el contexto colombiano, es la consagración del principio denominado **“enfoque transformador”** en el marco del Decreto 4800 de 2011 (Art. 5º). Este busca eliminar los esquemas de discriminación y marginación de las víctimas del conflicto armado, evitando la repetición de los hechos. Es decir, en Colombia no solo se pretende reparar a las víctimas de manera integral con las cinco medidas ya mencionadas, sino también evitar que aquellas vuelvan a su situación previa de precariedad material y de discriminación³⁶. El enfoque transformador busca, precisamente, transformar esas circunstancias, pues la exclusión es un factor generador del conflicto armado. (negrillas del despacho)*

³⁴ Corte Constitucional, Sentencia C-753 de 2013.

³⁵ Corte Constitucional, Sentencia C-454 de 2006.

³⁶ Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011, Informe al Congreso de la República 2013.

En consecuencia se accederá además del reconocimiento de amparo de derechos solicitados, a declarar la prescripción adquisitiva de Dominio y en consecuencia, la restitución jurídica y material del predio que aquí se solicita identificado con FMI No. 442-4216 y Cédula Catastral No. 86 865 00 02 0001 0059 000 así como su entrega material, accediéndose consecuentemente a las pretensiones relacionadas con las órdenes que deberán emanar las autoridades a cargo para garantizar el cumplimiento del presente fallo.

Cabe resaltar en este punto que el núcleo familiar al momento de los hechos de despojo estaba compuesto por su compañera María Celina Yaqueno López (Q.P.D.) y sus hijos Carlos Aníbal Quelal Yaqueno y Bayardo Miguel Quelal yaqueno, respecto de quienes deben extenderse los efectos y términos del presente fallo en aplicación las normas e instrumentos vigentes de protección³⁷, con afinidad de la titulación y restitución material de propiedad y derechos, se harán a nombre del solicitante, que en el presente caso, quedó demostrado que fueron víctimas de los mismos hechos de abandono forzado, de conformidad con lo ordenado en el artículo 118 de la Ley 1448 de 2011.

No están llamadas a prosperar aquellas pretensiones que resulten inconducentes ya sea por no haberse probado los supuestos que las sustentan, o porque se han efectuado ya como actuaciones dentro del trámite procesal, o porque no corresponden con la declaración de pertenencia a decretar.

No obstante ello, se reserva el despacho la facultad de modular la presente decisión si en condiciones futuras se llegare a determinar que resulta necesario con el fin de garantizar el resarcimiento perseguido con el cumplimiento de las órdenes dictadas.

VI. DECISION

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Juzgado Tercero Civil Del Circuito de Descongestión Especializado en Restitución de Tierras, de Mocoa, Putumayo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR, RECONOCER y PROTEGER el derecho fundamental a la Restitución y/o Formalización de Tierras, a Carlos Aníbal Quelal Guancha identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.152.050 expedida en Valle del Guamuéz (Putumayo), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio en favor del señor Carlos Aníbal Quelal Guancha identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.152.050 expedida en Valle del Guamuéz (Putumayo), el predio denominado el Vergel situado en la Vereda el Placer, Inspección de Policía el Placer, Municipio del Valle del Guamuéz en este departamento, y que se individualiza de la siguiente manera:

Matricula Inmobiliaria	Código Catastral	Área Solicitada	Área a Restituir	
442-4216	86 865 00 02 0001 0059 000	6 Has + 5946 m ²	6 Has + 5946 m ² .	
COORDENADAS DEL PREDIO				
PUNTO	LATITUD	LONGITUD	NORTE	ESTE
2000	0°28'43,106"N	76°58'44,347"W	544761,270797	676881,160674
2001	0°28'41,928"N	76°58'37,233"W	544724,956036	677101, 407618
2002	0°28'34,224"N	76°58'36,782"W	544488,02062	677115,265569

³⁷ En el ámbito internacional se ha creado un catálogo de tres garantías básicas para las víctimas de violaciones a los derechos humanos: la verdad, la justicia y la reparación integral. Esta Corporación ha entendido que entre "estos tres derechos median relaciones de conexidad e interdependencia, de manera tal que no es posible lograr la justicia sin la verdad y no es posible llegar la reparación sin la justicia"³⁷. El Estatuto de Roma, por su parte, consagra en el artículo 75 el derecho a la reparación de las víctimas, el cual incluye "la restitución, indemnización y rehabilitación" que deben suministrarse a las víctimas o a sus familiares (Sentencia T-054/2017)

2003	0°28'33,885"N	76°58,45,975"W	544477,69943	676830,656684
LINDEROS Y COLINDANCIAS				
NORTE	Partiendo desde el punto 2000 en línea recta en dirección oriente, en una distancia de 223,22 mts hasta llegar al punto 2001 con predios de Quebrada Fátima.			
ORIENTE	Partiendo desde el punto 2001, en dirección sur, en una distancia de 237,34 mts, hasta llegar al punto 2002, con predios del señor Rubén Pinchao.			
SUR	Partiendo desde el punto 2002 en línea recta en dirección occidente, en una distancia de 284,84 mts, hasta llegar al punto 2003 con predios del señor Pinchao.			
OCCIDENTE	Partiendo desde el punto 2003 en línea recta en dirección Norte, en una distancia de 288,10 mts, y cerrando con el punto 2000 con predios de Segundo Cuayas.			

Predio que se desprende de uno de mayor extensión el cual es de propiedad del señor Carlos Aníbal Quelal Guancha, y que se individualiza con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 442-4216 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Asís.

TERCERO: ORDENAR a la señora Registradora de Instrumentos Públicos de Puerto Asís (P.), lo siguiente:

- Inscribir esta Sentencia en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 442-4216, y en el que se cree a partir de ésta decisión.
- Segregar del predio de mayor extensión, identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 442-4216, constante de seis hectáreas y cinco mil novecientos cuarenta y seis metros cuadrados (6 Has + 5946 m²) que le ha sido reconocido mediante pertenencia al solicitante, y por tanto crear para éste predio un nuevo Folio de Matrícula a efecto de generarle independencia al título, el cual deberá tener en cuenta los linderos y coordenadas que se determinan en el numeral segundo de esta providencia.
- Levantar todas las medidas cautelares de inscripción de la demanda que recaen sobre el bien perteneciente al Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 442-4216, proferida al momento de dar inicio a este trámite judicial.
- Arrimar a este Despacho y al IGAC, el Certificado de Libertad y Tradición actualizado del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 442-4216 y el que se origine a partir de este fallo.
- Disponer como medida de protección, la restricción establecida en el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011, consistente en la prohibición para enajenar el bien inmueble restituido durante el término de dos (2) años, siguientes a la expedición de esta sentencia, sin menoscabo de las prohibiciones de que trata la Ley 160 de 1994. Por Secretaría líbrese comunicación a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Asís, Putumayo, para que la inscriba en el Folio de Matrícula Inmobiliaria respectivo.

CUARTO: ORDENAR al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que dentro del término perentorio de un (1) mes, contado a partir del recibo de la calificación de la sentencia en los respectivos Folios de Matrícula Inmobiliaria, proceda a la actualización de sus registros cartográficos y alfanuméricos, atendiendo los criterios de individualización del predio reconocido en este fallo, debiendo **DESENGLOBAR** del predio de Cédula Catastral No. 86 865 00 02 0001 0059 000, el bien que le ha sido reconocido mediante pertenencia al reclamante y del cual se ordena restituir a su favor seis hectáreas y cinco mil novecientos cuarenta y seis metros cuadrados (6 Has + 5946 m²), debiendo rendir informe a este Despacho una vez se cumpla dicha tarea.

QUINTO: COMISIONAR al Juzgado Promiscuo Municipal de Valle Del Guamuez, Putumayo, para que dentro del término de treinta (30) días siguientes al recibo del Despacho Comisorio, realice la diligencia de entrega del predio atrás reseñado a favor del aquí solicitante. Para la materialización de dicho acto procesal, debe coordinar con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Dirección Territorial Putumayo y la Fuerza Pública, a fin de

obtener el apoyo logístico para la ejecución de dicha entrega. Por secretaría líbrese el respectivo despacho comisorio.

SEXTO: REITERAR la orden dada a la Unidad Administrativa Especial para la Atención Integral y Reparación a las Víctimas y a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, del orden nacional y territorial, en la sentencia número 246 del 19 de noviembre de 2013 proferida por el Juzgado 1° Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de esta ciudad dentro del expediente 2013-00070-00, dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Restitución de Tierras, frente a la ejecución del plan de retorno aprobado el pasado 14 de diciembre del 2015, para las veredas de la Inspección del Placer del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, siguiendo los parámetros establecidos en la ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, bajo la coordinación de la Unidad de Víctimas.

Igualmente, deberá tener en cuenta respecto a las órdenes que aquí se impartan, que el reclamante junto con su núcleo familiar al momento del desplazamiento se encontraba compuesto de la siguiente forma:

1° NOMBRE	2° NOMBRE	1° APELLIDO	2° APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	VINCULO	PRESENTE AL MOMENTO DE LOS HECHOS
MARIA	CELINA	YAQUENO	LOPEZ	39.840.443	CONYUGE (FALLECIDA)	SI
CARLOS	ANIBAL	QUELAL	YAQUENO	18156878	HIJO	SI
BAYARDO	MIGUEL	QUELAL	YAQUENO	18156202	HIJO	SI

Personas de extracción campesina, que los beneficiarios de la sentencia favorable a su Solicitud de Restitución De Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente pertenecientes a uno de los grupos de especial protección y atención por parte del ente estatal, lo que implica que se les debe aplicar por el Estado el principio de *Enfoque Diferencial* para la interpretación de normas y aplicación de políticas de estado, teniendo en cuenta que son sujetos de especial protección.

También, esta entidad deberá coordinar en asocio con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Dirección Territorial Putumayo, y el Juzgado Promiscuo Municipal del Valle del Guamuez (P), la entrega material del predio descrito en el numeral segundo de ésta providencia, y a favor de la aquí solicitante.

La UARIV también tendrá que adelantar el proceso de **VERIFICACIÓN DE CARENCIAS**, al que se refiere el Decreto 1084 de 2015, a partir del Título 6 en su capítulo 5, a fin de determinar en qué etapa deberá ser atendida la restituida y su grupo familiar, estableciendo los criterios y procedimientos para la entrega de la atención humanitaria de emergencia o transición a las víctimas de desplazamiento forzado con base en la evaluación de los componentes de la subsistencia mínima o la superación de la situación de vulnerabilidad del hogar, para luego dar paso a la correspondiente indemnización por vía administrativa. No sobra advertir que este grupo familiar, y toda la población que ha sido beneficiada con los pronunciamientos de este Despacho, deberán ser atendidos de manera prioritaria con respecto a la aplicación del decreto en mención, tanto en lo que tiene que ver con la entrega de las ayudas humanitarias así como con el pago de las indemnizaciones por vía administrativa al ser víctimas del delito de desplazamiento forzado o de cualquier otro hecho delictivo generado por nuestro conflicto armado interno.

Igualmente, se debe tener en cuenta respecto a las órdenes que aquí se impartan que el reclamante es de extracción CAMPESINA, lo que implica que a este núcleo familiar le debe aplicar el Estado, el

principio de ENFOQUE DIFERENCIAL, para la interpretación de normas y aplicación de políticas de estado, convirtiéndose en sujetos de especial protección reforzada.

De igual manera, frente al actual Plan de Retorno para el municipio del Valle del Guamuéz, se dictan las siguientes órdenes como medidas con enfoque transformador:

- El Departamento para la Prosperidad Social (DPS), según su oferta institucional, deberá poner en marcha la estrategia que busca implementar medidas de asistencia y acompañamiento a la población víctima del conflicto armado interno, y más concretamente, del delito de desplazamiento forzado, para que éstas puedan lograr su auto sostenimiento en pro de una estabilización socio-económica al interior de cada hogar.
- Igualmente, esta entidad, en asocio con el Ministerio de Cultura, deberá ejecutar proyectos de inversión social en infraestructura física al servicio de la comunidad (Centros de recreación, deporte y cultura), en el lugar donde se encuentra ubicado el predio inmerso en este proceso.
- En cada una de sus competencias, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio del Trabajo y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), tendrán que poner en marcha todos los programas de generación de empleo y su correspondiente capacitación, ello en favor de todo el núcleo familiar de la solicitante, según lo dispone el título IV, capítulo I artículo 67 y 68 del Decreto 4800 de 2011.
- De igual manera se les deberá garantizar el acceso a la educación preescolar, básica, media, técnica y universitaria, concediendo incentivos y créditos de estudio para que puedan inscribirse a carreras técnicas, tecnológicas o universitarias relacionadas especialmente con el agro o a conveniencia del beneficiario, estando también involucradas para este fin, otras entidades tales como, el Ministerio de Educación, el ICETEX, y las Secretarías de Educación departamental y municipal.
- La UAEGRTD, deberá incluir por una sola vez a la beneficiaria de este pronunciamiento y a su grupo familiar, en el Programa de Proyectos Productivos a cargo de la dependencia que internamente maneja ese tema, esto luego de verificar que se realizó la entrega o el goce material del predio objeto de restitución, y además viendo la viabilidad del proyecto, y de acuerdo a lo establecido en la Guía Operativa que maneja ese programa.
- El Ministerio de Salud y Protección Social, las Secretarías de Salud del departamento y del municipio del Valle del Guamuéz, junto con la EPS EMSSANAR, deberán garantizar de manera integral y prioritaria, a la solicitante, y su núcleo familiar la cobertura en lo que respecta a la asistencia médica y psicológica, según se reporta en la caracterización hecha por la Unidad de Restitución de Tierras y el ICBF, en los términos del artículo 52 de la Ley 1448 del 2011 y los artículos 91 y subsiguientes del Decreto 4800 de 2011.
- Además se implemente en este departamento, en coordinación de la UARIV, el programa de atención psicosocial y salud integral para las víctimas del conflicto armado (PAPSIVI) con el fin de mitigar la afectación emocional de esta población.
- Al Departamento del Putumayo y el municipio del valle del guamuéz, les corresponde gestionar a nivel central los recursos necesarios para la recuperación y mantenimiento de las vías de acceso al lugar en el que se encuentra ubicado el predio ordenado aquí restituir, y responsabilizarse también por la buena prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado e interconexión eléctrica en la zona.
- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tendrá que intervenir en la zona donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de este proceso, realizando el acompañamiento psicosocial a la familia que aquí ha sido beneficiada, determinando las diferentes necesidades de los menores de edad si los hubiere (niños, niñas y adolescentes) y que pueden aplicar en su favor según su oferta institucional, mediante los respectivos programas y proyectos, garantizando la atención integral a esta población.
- El Banco Agrario de Colombia, dentro de los planes o programas de crédito en favor de la población desplazada, tendrá que ofrecer a la persona interesada en este asunto, teniendo

en cuenta que se encuentra incluida dentro del Registro Único de Tierras Despojadas, la información completa en cuanto a cobertura y trámite para su consecución y desembolso, siempre que el mismo esté dirigido a una inversión agraria como proyecto productivo, y a iniciativa propia.

- Además, exhortar a esta misma entidad bancaria, Zonal Putumayo, gestione el pago por el beneficiario en condiciones favorables de la deuda pendiente y condonación de intereses corrientes y/o moratorios, en aplicación del artículo del acuerdo No. 009 del 2013 tramo 3, en el caso concreto en que los solicitantes hayan adquirido deudas crediticias.
- El Banco Agrario de Colombia, los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, y de Agricultura y Desarrollo Rural, en asocio o de manera individual, deberán atender prioritariamente a la persona solicitante y su grupo familiar, dentro de los programas para adquirir subsidios de mejoramiento, construcción o compra de vivienda nueva o usada, dentro del predio el cuál es objeto de compensación, y según su naturaleza, esto es, si es rural o urbano.
- Para lograr la materialización de este literal, la Unidad de Restitución de Tierras tendrá que remitir al Banco Agrario de Colombia, mediante el Acto Administrativo correspondiente, y de forma periódica, un listado de las personas que han sido beneficiadas con la Restitución de Predios y que tienen la necesidad de ser priorizadas en el tema de vivienda.
- El municipio de Valle del Guamuéz, representado por su señor Alcalde, y en coordinación con el Concejo de esa localidad, deberá dar aplicación al Acuerdo No. 013 del 19 de junio del 2015, "Por el cual se establece la condonación y exoneración del impuesto predial, valorización, tasas y otras contribuciones a favor de los predios restituidos o formalizados en el marco de la ley 1448 de 2011", a los reclamantes de la presente acción pública, sobre el predio objeto de compensación y durante los dos años siguientes a la entrega material y jurídica.
- El Centro de Memoria Histórica deberá acatar de manera puntual los artículos 139, 147, 148 de la Ley 1448 de 2011, en la zona sobre la cual cobija esta decisión, y en lo que tiene que ver con las medidas de satisfacción y el recaudo de la información relativa a las violaciones de las que habla el artículo 3 ibídem.
- El Fondo de la Unidad de Tierras deberá aliviar las deudas que por concepto de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, tenga la interesada con las empresas prestadoras de los mismos y con las entidades financieras, en especial con el Banco Agrario, por créditos relacionados con el predio, dando aplicación del artículo del acuerdo No. 009 del 2013 tramo 3, en el caso concreto en que los solicitantes hayan adquirido obligaciones crediticias.
- El Comando de la Vigésima Séptima Brigada de Selva del Ejército Nacional, al igual que el Comando de Policía del Departamento del Putumayo, en ejercicio de su misión institucional y constitucional, tendrán que ejecutar los planes, estrategias, actividades y gestiones que sean necesarias para brindar la seguridad que se requiera a fin de garantizar la materialización de lo dispuesto en esta sentencia, lo cual debe hacer parte del Plan de Retorno coordinado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
- Todas las entidades involucradas en el cumplimiento de las ordenes aquí proferidas y expuestas en la Ley de Víctimas, relacionadas exclusivamente con la Restitución de Tierras en favor de Joba Abigail Pantoja Rosero deberán rendir ante este despacho un informe pormenorizado cada tres (3) meses, de todas las actividades, gestiones y actuaciones tendientes a su acatamiento; ello a fin de poder mantener control y seguimiento, en lo que a post fallo se refiere y hasta tanto desaparezcan las causas que amenacen los derechos de la parte solicitante, según lo dispone el parágrafo primero del artículo 91 de dicha Ley.

SEPTIMO: ACLARAR, que todas las entidades mencionadas en el numeral anterior, las cuales hacen parte del SNARIV, aparte del cumplimiento a las órdenes puntuales aquí impartidas, deberán asumir sus obligaciones adicionales, respecto de los diferentes convenios o acuerdos interinstitucionales, relacionados con el tema de la atención y reparación integral a las víctimas de

las violaciones a las que se refiere el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, y particularmente a las que fueron beneficiadas con el presente pronunciamiento, ello en consonancia con el art. 26 ibídem.

OCTAVO: ORDENAR a la EPS EMSSANAR, para que rinda ante esta judicatura un informe completo de los servicios de salud dados a los señores Bayardo Miguel Quelal Yaqueno identificado con C.C. No. 18.156.878 y Carlos Aníbal Quelal Yaqueno identificado con C.C. No.18.156.878, especialmente los servicios brindados a causa de la enfermedad que sufren de esquizofrenia.

NOVENO: NEGAR las pretensiones enunciadas en los numerales 7 a 9 y 11 a 13, especiales y secundarias numerales 1 y 2, pues en el caso aquí tratado no aplican, por no darse los supuestos que las fundan, advirtiendo, que en el caso en que varíen o persistan las condiciones, podría modificarse esta decisión o por corresponder a actos procesales que se hicieron efectivos en el transcurso del proceso no se concederán, como quiera que prosperara la solicitud principal como fue la restitución del bien inmueble reclamado.

DECIMO: NOTIFICAR este fallo al Representante legal del municipio de Valle del Guamuéz , Putumayo, a la Procuraduría General de la Nación delegada para Restitución de Tierras y al representante judicial de la solicitante, de conformidad con el artículo 93 de la ley 1448 de 2011, anexando copia de la misma.

Para dar cumplimiento a las órdenes aquí emanadas se remitirá copia virtual de esta providencia a las Direcciones Generales de las Unidades de Víctimas y de Tierras Despojadas, al Gobernador del Departamento del Putumayo, a CORPOAMAZONIA y a las entidades que pertenecen al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, a la Contraloría General de la República y a la Defensoría del Pueblo.

Por secretaría, líbrense los oficios, las comisiones y las comunicaciones pertinentes.

Se advierte que al no tener recursos la presente providencia, por ser este un proceso de única instancia, queda debidamente ejecutoriada al momento de ser proferida.

DECIMOPRIMERO: SIN LUGAR a condena en costas por no haberse causado.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


ISBETH LILIANA RAMIREZ GOMEZ
Jueza

CONSTANCIA DE AUTENTICACION

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DESCONGESTION CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE MOCOA, HACE CONSTAR, QUE LAS ANTERIORES FOTOCOPIAS EN DIECINUEVE (19) FOLIOS FUERON TOMADAS DE SU ORIGINAL, DE LA SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA N° 021 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2018, PROFERIDA POR ESTE DESPACHO, **LA CUAL COBRO EJECUTORIA EL MISMO DIA 30 DE MAYO DE 2018**, DENTRO DEL PROCESO RADICADO CON EL NUMERO 860013121001-2015-00372-00, SIENDO SOLICITANTE EL SEÑOR **CARLOS ANIBAL QUELAL GUANCHA** IDENTIFICADO CON C.C. 18.152.050 EXPEDIDA EN VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO), DENTRO DE LA ACCION DE RESTITUCION DE TIERRAS Y/O FORMALIZACION DE TITULOS, POR LO TANTO SON AUTENTICAS EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES **ES PRIMER COPIA Y PRESTA MERITO EJECUTIVO.**

PROVIDENCIA QUE FUE NOTIFICADA POR EL MEDIO MÁS EFICAZ, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 91 PARÁGRAFO 1 Y ART. 93 DE LA LEY 1448 DE 2011.

MOCOA, PUTUMAYO, A TREINTA (30) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).



**NELLY YOLIMA LA ROTTA PINEDA
SECRETARIA**

